

“Ganamos una primera batalla”, dice el gobernador metropolitano, Claudio Orrego, cuando se le pregunta por su ánimo tras el fallo de la Corte de Apelaciones de Santiago que rechazó de forma unánime su desafuero.

Hiperactivo como siempre, sube y baja escaleras del histórico edificio donde está su oficina —en Morandé con Moneda— para la sesión de fotos. Hace pocas horas estuvo en Renca, supervisando las labores de rescate por el incendio provocado por el volcamiento de un camión de gas.

Cuenta que el martes pasado, el día del fallo, estaba ansioso. “Esa mañana a las cinco y media de la mañana subí un cerro, que es mi terapia”. Luego, ya en la oficina, optó por no seguir en vivo los resultados de su propio caso, un poco por nervios, un poco por cábala.

Hoy, los nervios parecen haberlo abandonado, dando paso al alivio, y a algo de rabia.

“Este fallo 24-0, no solamente decreta mi inocencia en este caso, yo creo que confirma mi honestidad, que ha sido una de mis cartas de presentación en mi vida pública. Y yo te diría que más allá de los sinsabores que trae consigo la política y que todas las autoridades tenemos que estar disponibles a ser criticadas, fiscalizadas, investigadas, yo creo que como autoridades también tenemos el derecho de exigir cierto estándar de seriedad y de respeto cuando se hace esto” dice a “El Mercurio”.

—Usted denuncia una operación política, una campaña en su contra, ¿de quién? ¿Por qué?

—Aquí, aparte del trabajo, a mi juicio, deficiente de parte de la Fiscalía de Antofagasta, había dos abogados querellantes en esta causa, uno del Partido Republicano, uno de la UDI, que no dudaron en faltar a la verdad durante todo el proceso y que son los mismos que, más allá del caso Procultura, a los cuatro meses de haber asumido como gobernador decidieron solicitar mi destitución. Entonces, cuando a los cuatro meses de asumir una autoridad democrática, en vez de pedir que se le investigue, se pide abiertamente la destitución, eso es aquí y en la quebrada del ají una maniobra política.

—Ahora, ¿por qué la maniobra política?

—Bueno, pregúnteles a quienes la hicieron. Yo creo que lamentablemente hay gente que no trepida en medios de ocupar o instrumentalizar la justicia con fines políticos. En mi época uno diría los temas políticos y los liderazgos en las elecciones. Y en este caso, mis adversarios pretenden llegar al cargo de gobernador regional por la vía de los tribunales y no por la vía de las elecciones.

—En sus críticas ha apuntado a la fiscalía, ¿sería parte de esa operación?

—Mi juicio respecto del desempeño de la Fiscalía de Antofagasta no es un juicio ligero e infundado. Luego de dos años de investigación, esta fiscalía terminó haciendo una acusación falsa a una persona inocente, lo que fue declarado por seis tribunales distintos. Yo no conozco a nadie, ni siquiera a mis peores adversarios, que no diga que un fallo inédito en la historia de Chile, un rechazo unánime de 24 ministros de la Corte de Apelaciones, no da cuenta de un trabajo negligente y claramente infundado. Dicho eso, la pregunta que yo me hago es si hubo negligencia grave o mala intención.

“Se dijo que se había aplicado la ley de compra por trato directo cuando la verdad es que se estaba aplicando la ley de subvenciones. Se dijo que el señor Larraín era funcionario público cuando no lo era. Se aplicaron pruebas que eran erróneas, que correspondían a otras personas, a otros tiempos y a otros temas. Se dijo que el proyecto de “Quédate” no existía cuando estaban las evidencias de que se ejecutó durante un año. Se dijo que no había pólizas cuando estábamos con el Consejo de Defensa del Estado y ya en la última etapa de cobrarla. Es tal el nivel de errores, que yo me imagino que el fiscal nacional va a tener que tomar cartas en el asunto”.

“CREÍAMOS QUE PROCULTURA ERA LA INSTITUCIÓN IDÓNEA”

—Se acreditó que no hay fraude al fisco. ¿Pero no hubo un mal manejo de los fondos públicos?

—Los que han sostenido eso tienen que probarlo. Dicen que este es un programa inventado, que se acordó en un aeropuerto, con un amigo y se asignó a dedo. Es una caricatura.

—¿No hubo entonces conversación en el aeropuerto?

—No solamente no lo hubo, sino que lo que la gente comprobó es que desde 2021 teníamos un plan para prevenir el suicidio en nuestro programa. En la página 55.

“Segundo, se dijo que se aprobó de forma expés. Nosotros tenemos 75 proyectos como este y el promedio de duración de la aprobación era tres meses. En el caso de este fueron cinco. Lo aprobó el pleno con 34 consejeros de todos los colores políticos, en forma unánime. El proyecto se ejecuta durante un año. Hay rendiciones mensuales. Están todos los papeles, todas las facturas, todas las boletas, toda la gente que se atendió, 15.000 personas. Y cuando llega el momento y hay efectivamente un incumplimiento de parte de Procultura, se pone término, se exige la restitución de los fondos, se cobran las pólizas de garantía y además nos querellamos. Entonces, cuando tú me preguntas a mí qué se hizo mal, la verdad es que nada. O sea, ¿alguien cometió un delito? Sí. Y hay que investigarlo. Y yo espero que la Fiscalía de Antofagasta, o la que fuere, se dedique a investigar la responsabilidad de la Fundación Procultura”.

—¿Cuál era el nexo que usted tenía con Larraín?

—Yo el día uno dije públicamente, y ante el Ministerio Público, que conocía a Alberto Larraín. Yo lo había contratado en su calidad de psiquiatra, experto en salud mental, para hacer el Centro de Salud Mental Infantil de Peñalolén y gran parte de nuestra relación a lo largo del tiempo había sido en torno a estos mismos temas. Que yo sepa, conocer a alguien no es un delito. Lo que es un delito es

CLAUDIO ORREGO, GOBERNADOR METROPOLITANO:

“Los querellantes no están preocupados de la probidad (...) LO QUE QUIEREN ES DESTITUIRME”

“Este fallo 24-0, no solamente decreta mi inocencia en este caso, yo creo que confirma mi honestidad”, dice la autoridad, a pocos días de que la Corte de Apelaciones rechazara su desafuero. Asimismo, critica a la Fiscalía de Antofagasta y duda “si hubo negligencia grave o mala intención”. | MATÍAS BAKIT R.



malversar los fondos o hacer un fraude al fisco, que es lo que hemos dicho sistemáticamente que no se ha hecho en este caso.

—¿No eran amigos? ¿No era usted su padrino político?

—Te insisto, yo conozco a mucha gente, pero esa gente que conozco no va a mí cumpleaños. Eso es un buen indicador. Y conozco gente en todas las fundaciones y en este caso particular efectivamente lo conocía en su calidad de especialista.

—¿Quién puso sobre la mesa el nombre de Procultura? ¿Usted se lo planteó a las fundaciones?

—En todas las instancias colectivas y públicas que tuvimos, el Cabildo de Salud Mental, la Mesa Regional de Salud Mental y la reunión con las fundaciones, en todas estuvo Alberto Larraín en su calidad de psiquiatra, experto en suicidios. Y cuando hubo reunión con las fundaciones se les dijo que no podíamos hacer 75 proyectos distintos, que hicieran uno. Pero que la institución que lo presentara tenía que estar disponible para avalar el 100% de los recursos. Y ahí las fundaciones deciden que lo haga Procultura, que tiene 15 años de experiencia con proyectos con el gobierno de Piñera, con el gobierno de Bachelet, con el gobierno de Lagos.

—Pero usted confiaba en Alberto Larraín, ¿no? Al menos en su expertise.

—Más allá de la confianza personal, lo que nosotros hicimos fue una evaluación de la institución, si cumplía o no con las normas. Ahora, él tenía un prestigio como médico, psiquiatra, experto en suicidios, que había colaborado en muchas cosas. Efectivamente creíamos que era la institución idónea para este tema. Ahora, con el diario del lunes, uno

“Cuando tú me preguntas a mí qué se hizo mal, la verdad es que nada”.

“En mis 35 años de carrera pública, nunca tuve un cuestionamiento. ¿Qué es lo distinto esta vez? Es que esta vez tengo 2,5 millones de votos”.

revisa y te das cuenta de cosas. Pero, si se cumplía con todas las normas en su momento, costaba anticipar lo que terminó ocurriendo.

—¿No hay algo que mejorar en los mecanismos de control?

—La factura se dejó de pagar un 27 de octubre. Y los primeros días de noviembre ya teníamos terminado el contrato.

“Lo que yo sí cambiaría, porque uno también aprende cosas, es que la ley permitía la entrega de la totalidad de los recursos...”.

—En una cuota...

—En una cuota. Eso lo hicimos con las 75 fundaciones y universidades. Ahora yo no lo volvería a hacer, aunque la ley lo permita. Y otro aprendizaje es que si nosotros queremos resguardar los fondos públicos, tenemos que hacerlo a través de instrumentos que sean eficaces en el mercado. O se cambia el instrumento y se hace más fuerte y hay un desafío para el gobierno que entra, o el Estado no puede seguir descansando en el instrumento de los seguros. Ese es el grave daño que le ha hecho Aspur (la aseguradora) al mercado de seguros chileno. Porque hoy día ninguna autoridad responsable podría cuidar los recur-

sos públicos con un instrumento mercantil como es la póliza de seguro a primer requerimiento, si es que hay una empresa que lleva dos años sin pagar. De todas formas estoy seguro de que Aspur va a tener que cumplir con su deber ético y legal de pagarnos”.

—La funcionaria Evelyn Magdaleno está formalizada pero aún trabaja en la gobernación. ¿La gobernación la está apoyando?

—Primero, el Gobierno Regional no la está apoyando, ella se defiende sola. Segundo, toda la tesis que enarbó la Fiscalía de Antofagasta en contra de Evelyn Magdaleno era que ella había sido parte del fraude al fisco gestionado por el gobernador. Y en derecho, los accesorios siguen la suerte de lo principal. Si no existe fraude al fisco, se debería caer la tesis en el caso de ella. Ella fue una de las personas, de los 40 funcionarios públicos de este Gobierno Regional, que participaron en la evaluación del proyecto Quédate. Y si el proyecto, como ahora todo el mundo reconoce, existió y se hizo como correspondía, ¿por qué habría que impugnarle algo a ella?

—¿Cuál fue la justificación, la medición que se hizo para decidir echar a andar el programa?

—Una de las acusaciones falsas es que este sería un programa sin fundamento. Saliendo de la pandemia, el acuerdo de todos los expertos en salud pública chilena era que la siguiente pandemia era de salud mental y especialmente (se debía abordar) el suicidio. Chile está en altos niveles. Nosotros realizamos, cuando yo era candidato en el 2021, un cabildeo a este respecto, al que invitamos a más de 100 entidades públicas y privadas. Se llegó a la conclusión y yo lo puse en mi programa. Y cuando empezamos a hablar con las distintas fundaciones nos dijeron que el problema es que siempre llegábamos tarde. Entonces, se diseñó. Se crearon dos centros centinelas, en el Hospital Salvador y el Hospital Félix Bulnes. Se creó una línea de atención directa. Se creó un postítulo con la Universidad de Chile para capacitar a 150 funcionarios. El programa ha recibido premios. Hoy seguimos atendiendo. Y lo hace el Servicio de Salud Metropolitano.

—Aún debe resolverse el caso en el Tricel, que tiene relación con las minutas cuestionadas por la Contraloría, en relación con el coaching realizado a los funcionarios. Ahí, por lo que se ve en el informe, en esa asesoría se hablaba de política, de campaña, e incluso de sus opciones presidenciales. ¿Cómo se explica eso?

—Primero, quiero decirles a los querellantes que no me vengán hoy con que están preocupados de la probidad, del buen funcionamiento, porque lo que ellos quieren es destituirme. Tratan de tomar un informe de Contraloría como si fuera una sentencia ejecutoriada. Pero ¿qué es lo que dijo Contraloría? Seamos exactos. Que

en este caso había cosas que eran raras. Y que las iban a enviar al Ministerio Público para su información y fines que estimen convenientes. Nosotros entregamos toda la información, incluidos nuestros celulares, voluntariamente.

“El consultor es una persona de trayectoria, que fue contratada como coach. Y lo que hizo fue una sesión de coaching. El mismo le dijo a la fiscal, en su momento, una buena metáfora. Si yo fuera el coach de Zelensky, el Presidente de Ucrania, ¿podría hacerle coach sin mencionar la guerra? Imposible. ¡Me transforma eso en un experto bélico? No”.

—Siguiendo ese mismo ejemplo, ¿era inevitable entonces hacer un coaching hablando de las posibilidades presidenciales o de la popularidad del gobernador?

—Es que eso es absolutamente erróneo. Cuando tú tienes una minuta que hace un consultor, de cuatro o cinco páginas, tú no puedes quedarte con un párrafo. Además, ojo, esta idea de que se hizo en el año electoral, es mentira. Era una consultoría integral por cuatro años, en que se atendieron cerca de 17 funcionarios directivos nuestros. Hay mala intención, distorsión, y al final va a terminar siendo, igual que lo que ocurrió con Procultura, falsa.

“Lo que ellos están buscando es que un tribunal de la República haga lo que no pudieron hacer en las urnas. Reemplazarme”.

—Está involucrado en casos de probidad es algo que no le había pasado en su carrera. ¿Cómo daña esto su imagen?

—En mis 35 años de carrera pública, gestionando equipos, grandes presupuestos y proyectos nunca tuve un cuestionamiento. ¿Qué es lo distinto esta vez? Es que esta vez tengo 2,5 millones de votos. ■